



*La Paz y los Derechos Humanos**

Oscar Rojas Flores

«A mí me mataréis, pero volveré y seré millones».

Tupac Katari

Con el proceso de conquista y colonización de los grupos indígenas se abrieron las páginas de una memoria de violaciones de los derechos humanos, violación que pese a los años, aún no concluye. Una lucha cruenta y sangrienta que se acerca a las seis centurias es la constante que se observa en la historia de nuestra América.

En un largo recorrido de ignominia y opresión, nuestros pueblos han enfrentado a diversos proyectos de recomposición de fuerzas o estrategias en la estructura de dominación, de cuyos resultados se siguen buscando los saldos favorables a nuestro interés vital. Por esta razón es preciso reflexionar ante cada modificación que se perciba en el ámbito de nuestra región.

Como producto de la crisis de la región en el campo del conflicto armado, acudimos a la puesta en marcha de un plan de paz para Centroamérica. El 7 de

* Ponencia presentada en el III Simposio «Joaquín García Monge». Los Derechos Humanos en Centroamérica: una perspectiva sociológica. IDELA-UNA. Costa Rica. Octubre, 1987.

agosto de 1987, se firmó en Esquipulas, Guatemala, por parte de los presidentes de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, el documento: «Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica», que en este trabajo denominamos «Plan de Paz».

El Plan de Paz tiene como contenidos importantes el haber planteado una alternativa regional unitaria, a las tesis guerreristas y proclives a apoyar una alternativa armada directa en Centroamérica. Por otra parte, ayuda a atenuar la tensión, por momentos muy explosiva, en las relaciones entre Honduras y Nicaragua, y Costa Rica y Nicaragua. Muestra además, la posibilidad de una apertura política, que permita un eventual replanteamiento de la integración regional, que factibilice una reactivación en el sector económico comercial orientado al área. Como otro aspecto de significativa importancia está la posibilidad de crear alternativas interdependientes, en donde exista el peso específico relevante de una participación de la Comunidad Económica Europea.

A nivel interno, en Costa Rica el Plan de Paz significa un cambio importante en la política exterior, cuya actitud de tradicional alineamiento y apoyo a posiciones antilatinoamericanistas de grupos gobernantes en los Estados Unidos, ha ocasionado una sensible erosión a la imagen de nuestro país en el ámbito internacional. Esta toma de posición asumida por el gobierno de Costa Rica en favor de una salida negociada en el conflicto centroamericano, por el contrario, presagia un tortuoso enfrentamiento con los sectores denominados de «línea dura» conservadora y proguerrieristas, tanto nacionales como extranjeros; que consideran el Documento como un reto a la política intervencionista, que el actual gobierno de los Estados Unidos mantiene en el área. Esta no es una caprichosa afirmación, sino que consta en las actas del Senado y en el Presupuesto Nacional de los Estados Unidos y además en documentos probatorios de la Corte de Justicia de La Haya que demuestra esta realidad. Es predecible la acción de estos grupos que sin duda alguna estimularán la agudización de las presiones sociales inter-

nas, con el propósito de diferenciarse e incluso «esterilizarse» con respecto a la posición asumida por el Presidente Oscar Arias.

El prisma de este panorama político parece ser claro y hasta cabe la hipótesis de que esta opción ha sido diáfananamente considerada por el Presidente Arias.

No obstante, es preciso hacer una reflexión que en nuestro caso resulta necesaria en virtud de la obligación y compromiso de la Universidad Nacional de analizar nuestra realidad nacional, lo cual implica su entorno, y en el presente caso, la incidencia del Plan de Paz sobre los factores histórico-estructurales que han estado presentes en la configuración y desarrollo de la crisis centroamericana. Es conveniente percibir con sobriedad que el Documento es una opción hacia una vía de diálogo. Además propone la apertura de un espacio para la negociación, de manera tal que a partir de los resultados de ésta, se posibiliten resoluciones alternativas en cada país, orientadas a modificar las condiciones opresoras y deshumanizantes de los aparatos de dominación.

Resulta oportuno recordar que por centurias las raíces de la violencia en Centroamérica, se han gestado en el desarrollo y consolidación de una estructura históricamente conformada, que condena y somete a condiciones de vida infrahumanas a amplios sectores de la población. Estas condiciones de opresión y miseria están caracterizadas por una secular violación a los Derechos Humanos, que en forma paradójica, ha brindado beneficios favorables al fortalecimiento económico de elites dominantes.

Resulta grosero aceptar que las iniquidades cometidas contra las poblaciones indígenas aún prosigan en la región. En el nuevo pacto colonial, estas poblaciones sufren el violento despojo de sus tierras, la explotación de su trabajo y su exterminio cultural, tanto de parte del colonialismo interno como de sectores transnacionales.

El estado liberal surgido en la región en el período «posindependiente», orientó su estructura económica hacia

el mercado internacional. El monocultivo y como factor incidente, la incorporación de la mano de obra de nuestros países en la división internacional del trabajo, condenó a las lacras que subyacen en la dependencia externa, a grandes masas de la población centroamericana.

El emergente estado centroamericano, como producto de profundas fisuras ocasionadas por constantes disputas interoligárquicas por el poder, fue terreno fértil para el desarrollo de acciones de mediación injerencista de los centros de poder internacional. Constantes intervenciones en los asuntos internos de nuestros países, decorados en muchos casos con las intervenciones militares o con el método amedrentador de maniobras militares en el área privilegiaron aquellos proyectos expoliativos que siempre recibieron el apoyo de la emergente oligarquía dependiente. En la mayoría de los países el poder se ejerció en una forma carente de legitimidad, para lo cual fue preciso instaurar la represión por medio de aparatos militares. Todo este período sirvió para fortalecer a una oligarquía agroexportadora que sumió al pueblo centroamericano en constantes luchas orientadas a la defensa de los derechos mínimos, con experiencias muy sangrientas y dolorosas.

Como parte de un proceso de reestructuración del modelo del capitalismo dependiente, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, anuncia con optimismo, un proyecto desarrollista en la región, que teóricamente transformaría a la economía centroamericana, atenuando las tensiones sociales originadas por el intercambio desigual, incorporando en los beneficios de esta nueva era a los amplios sectores históricamente postergados. Una nueva expectativa de una justa democracia liberal pareció perfilarse en el área. Los pueblos esperaron con entusiasmo el cumplimiento de una alternativa más participativa.

Si bien el proyecto desarrollista, inicialmente, pareció resolver favorablemente algunos aspectos de la desigualdad social existente, no logró en el mediano plazo dar respuesta a las diferencias estructurales. Por el contrario, en la mayoría de los casos estimuló un desmedido

enriquecimiento de los grupos oligárquicos tradicionales y emergentes, fortaleciendo además un galopante proceso de extracción de excedentes al capital externo, con lo cual la brecha social entró en un proceso expansivo irreversible.

El advenimiento del denominado «Estado Benefactor» no se estandarizó en cuanto a los beneficios de una más justa distribución de la riqueza en la región. En este sentido Costa Rica logró significativos avances en áreas tales como: salud, educación, comunicaciones, vivienda y nivel de empleo. La expansión de una clase media políticamente muy participativa en lo electoral, fortaleció los valores de la democracia liberal. Al ritmo de ese crecimiento progresivo y de cierto nivel de desarrollo, creció en proporciones alarmantes, una elevada deuda externa en el ámbito de una insuficiencia estructural que capacitara al país para mantener un nivel de crecimiento sostenido. La crisis no se ha hecho esperar y revirtiendo los índices en el nivel de vida del pueblo, se ha ido acentuando hasta mostrar un significativo deterioro en la calidad de vida del costarricense.

Hacemos énfasis en el caso costarricense en virtud de que el proceso distributivo, mostró saldos más favorables que la frustrada experiencia desarrollista en el resto de la región.

Para el resto de la economía centroamericana, la situación ha sido de una permanente erosión. La guerra entre El Salvador y Honduras fue un indicador suficiente para percibir el desquebrajamiento del proyecto integrador. Los grupos oligárquicos del área en contubernio con intereses extranjeros, por vía de una egoísta e irreflexiva extracción de riqueza, agotaron el resultado de la débil experiencia desarrollista, sumiendo a la región en crisis de irrupción de la protesta popular de alcances impredecibles. El brote del conflicto social es de tal magnitud que CEPAL ha considerado:

«Resulta difícil encontrar soluciones viables en el plano político, en el económico y en el social».

(Revista de la CEPAL N°
22- 1984 - P. 53)

Esta crisis en proporciones cada vez menos controlables, origina condiciones extremas de miseria en amplios sectores. En estas condiciones las presiones sociales son en alto grado críticas. Los gobiernos del área proclives a la solución militar, estimulados además, por una obnubilada política contrainsurgente guerrillerista de los sectores más reaccionarios de los Estados Unidos, han convertido a la región en un foco de alta tensión militar. A los problemas de desempleo, deterioro de la salud, desnutrición, injusta distribución de la tierra, y del ingreso, carencia de vivienda, se encuentra respuesta con una lucha contrainsurgente de «tierra arrasada» o a una guerra internacionalizada con alto contenido geopolítico.

Los errores y horrores de esta opción estratégica se contabilizan para los centroamericanos en millares de muertos, millares de desaparecidos, millares de mutilados de guerra, millares de refugiados, millares de niños huérfanos o ancianos abandonados, división de la familia centroamericana y destrucción de infraestructura necesaria para la sobrevivencia física y económica de nuestros pueblos.

Los resultados de tal genocidio estructurado, es miseria y muerte por un lado y un proceso armado sin resolución clara como tal. Es decir, una sociedad centroamericana en colapso.

Si bien a tan trágico cuadro sólo se le puede encontrar respuesta con un discurso pacífico, es preciso tomar conciencia que ahí no puede terminar el asunto. No es en esta forma como puede tener solución un problema estructural que requiere significativas cuotas de compromiso de los gobernantes en el impulso de soluciones duraderas, que permitan gestar el germen de una sociedad más justa, libre y participativa.

La crisis del sistema capitalista a nivel mundial, nos ubica ante una época de posibles y significativos cambios al interior de su estructura hegemónica, ajustes estos que sin duda impondrán efectos influyentes en los países dependientes de la periferia. No se puede negar

que el esquema capitalista se enfrenta a tiempos difíciles en donde los centros hegemónicos presentan fisuras internas y una asincronía en el ámbito de sus articulaciones. Nuestros tiempos parecen plantear la hipótesis de que estamos en un período de transición hacia una nueva correlación de fuerzas en el plano internacional.

Como una situación de impredecible gravedad, está la situación de la deuda externa del llamado «Tercer Mundo» que oprime en el plano político, económico y social a nuestras cada vez más agobiadas economías. Las medidas sugeridas para atenuar la crisis, son soluciones impuestas por los organismos financieros internacionales y son de una «sola cara»: cargar el peso de la crisis en las espaldas del pueblo y cumplir con las exigencias de los acreedores. Las políticas de ajuste estructural propenden a una situación de inestabilidad social que amenaza fatalmente la paz. Así el proyecto neoliberal solo podría mantenerse bajo la tutela represiva de un fuerte aparato militar que reprima la protesta popular.

Este es el panorama al que nos enfrentamos y en el que se da un Plan de Paz que para validarse debe complementarse con acciones que permitan buscar las soluciones de los grandes e ingentes problemas sociales, que atentan contra los derechos humanos en la región. La gravedad del momento se puede radicalizar con un optimismo exacerbado, que no nos permite hacer una lectura crítica de la realidad centroamericana.

El respeto a los derechos humanos exige soluciones concretas a la situación de opresión física e ideológica, así como a las condiciones de miseria que vive la región.

La ingerencia de fuerzas extrañas al área, con todo un aparato militar e ideológico, así como en el plano económico, constriñe la soberanía y el derecho a la autodeterminación de nuestros pueblos. Además, radicaliza la situación de violación de los Derechos Humanos. En estas condiciones el Plan de Paz puede correr el riesgo de convertirse en sólo un elemento de postergación de la crisis. Esto lo ubica en una seria disyuntiva

vinculada a los intereses futuros de Centroamérica: O permite que se abra un espacio franco que estimule una reestructuración en el plano político, social y económico de la región y en cada país, o solo se convertirá fatalmente, en un mecanismo de postergación de la guerra, en cuyo lamentable caso deberemos afrontar un mayor grado de violencia, dolor y muerte.

Desde la perspectiva de este III Simposio «Joaquín García Monge», debemos convocar a la responsabilidad y conciencia ciudadana, para que se demanden las acciones conjuntas que permitan preservar la paz por la vía de dar soluciones duraderas a la crisis social históricamente conformada en la región. Únicamente el promover el bienestar, la justicia y una práctica cotidiana en libertad, será lo que logre preservar la paz en la región.

El Estado Centroamericano debe garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos a todo individuo, eso será el elemento fundamental contra la guerra y la violencia en la región.

«Por eso vivimos aquí, orgullosos de nuestra América, para servirla y honrarla. No vivimos, no, como siervos futuros ni como aldeanos deslumbrados, sino con la determinación y la capacidad de contribuir a que se la estime por sus méritos, y se la respete por sus sacrificios».

José Martí